

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 74
O R D I N A R I A
LUNES 4 DE JULIO DE 2011

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diez minutos del lunes cuatro de julio de dos mil once, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número setenta y tres, ordinaria, celebrada el jueves treinta de junio de dos mil once.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asunto de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el lunes cuatro de julio de dos mil once:

- II. 1. 912/2010** Expediente varios 912/2010. Consulta respecto del trámite que debe darse a la instrucción ordenada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de siete de septiembre de dos mil diez dictada en el expediente varios 489/2010, relacionado con la sentencia emitida el veintitrés de noviembre de dos mil nueve por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.511 ***** contra los Estados Unidos Mexicanos. En el proyecto formulado por la señora Ministra ponente Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. La participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso ***** contra los Estados Unidos Mexicanos” se circunscribe a los términos precisados en la presente ejecutoria. SEGUNDO. Infórmese esta determinación al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para los efectos a que haya lugar”.*

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación de su proyecto, para lo cual precisó los antecedentes del asunto y los principales temas que se abordan en él.

Además, indicó que mientras se elaboraba el proyecto surgieron algunas modificaciones, como son la aprobación del Decreto de la Convención Internacional de la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada adoptada por la Asamblea General de la ONU el veinte de diciembre de dos mil seis, la que remite al Estatuto de la Corte Penal de Roma sobre la misma materia, así como las sentencias relativas al caso *****, ***** y ***** y la iniciativa al artículo 57 del Código de Justicia Militar, la cual aún no es discutida en el Congreso de la Unión.

El señor Ministro Aguirre Anguiano consideró que la consulta excede el propósito de definir el trámite que debe seguir el asunto y dio lectura a los acuerdos tomados por unanimidad de votos en la sesión del siete de septiembre de dos mil diez.

Mencionó que él esperaba una propuesta sobre la emisión de un acuerdo general relativo al trámite en tanto se generaba la ley correspondiente.

La señora Ministra ponente Luna Ramos recordó que al abordarse el análisis del expediente varios 498/2010 se llegó

a la conclusión mencionada por el señor Ministro Aguirre Anguiano, en tanto que se acordó conforme a la votación obtenida la forma en que se analizaría el proyecto al no existir un procedimiento específico, ante lo cual se integró el expediente varios 912/2010 respecto de cómo se debía cumplir con lo ordenado en la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza solicitó a la señora Ministra Luna Ramos realizar la presentación punto por punto del proyecto.

La señora Ministra ponente Luna Ramos precisó los argumentos que sustentan el considerando cuarto “Temática de la consulta”, en cuanto en éste se estima que la determinación del Tribunal Pleno contenida en su resolución pronunciada el siete de septiembre de dos mil diez en el expediente varios 489/10, transcrita en el considerando segundo de esta ejecutoria, obliga a que se analice: 1. Si en el caso concreto se configura alguna de las salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2. Interpretar el alcance de las reservas o declaraciones interpretativas que formuló el Estado Mexicano, tanto al adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos, como a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y 3. Definir qué

obligaciones concretas le resultan al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó interrogantes respecto a por qué se proponen tesis en este asunto si no es jurisdiccional. Asimismo precisó que en el tema de las salvedades a las que se condicionó el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concluyó en la propuesta que no se configura la reserva relativa a la aplicación del artículo 33 constitucional, estimando correcta esta apreciación.

Además, señaló que se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca sin condiciones, la obligatoriedad de la sentencia dictada en el caso “*****”, además de incorporar dentro de sus criterios interpretativos consideraciones de fondo extraíbles de la presente resolución para casos futuros, lo que le llamó la atención, estimando necesario fijar en el orden jurídico interno el alcance de las normas relativas al reconocimiento de la competencia, ante lo cual el señor Ministro Presidente Silva Meza propuso reservar este tema para constreñirse a la enunciativa relativa al desarrollo en cumplimiento.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a la estimación del Tribunal Pleno los considerandos primero “Competencia”, segundo “Consideración total de lo resuelto por este Tribunal Pleno” y tercero “Antecedentes”, los que en

votación económica se aprobaron por unanimidad de once votos, con las reservas del señor Ministro Aguirre Anguiano.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia precisó que en la foja cincuenta y nueve del proyecto se propone que la resolución del expediente que estuvo a cargo del señor Ministro Cossío Díaz, obligó a este Tribunal Pleno a acordar que sí se actualiza una de las reservas y las declaraciones interpretativas de México, respecto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, así como la definición de las obligaciones concretas que le resultan al Poder Judicial de la Federación y emitir una declaratoria sobre la forma en que éste participará respecto del cumplimiento de la sentencia.

Ante ello, consideró que debía presentarse un proyecto de declaración respecto de la forma en que el Poder Judicial de la Federación participará en su cumplimiento; sin que se hubiera requerido un análisis de su validez, considerando que la propuesta parecería una resolución de disputa entre cumplir o no con la sentencia, por lo que, en ese caso, debían analizarse otros temas diversos, por lo que propuso encorchetar el considerando cuarto hasta que se analicen los alcances del temario propuesto.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó no tener inconvenientes respecto de aplazar el análisis de dicho

considerando, así como en relación con la reserva. Además, consideró que se está en posibilidad de establecer jurisprudencia en todos los casos y que se trata de un asunto jurisdiccional.

El señor Ministro Aguirre Anguiano consideró que no se estaba ante un asunto jurisdiccional, sino administrativo, por lo que valdría la pena discutir el tema pues no estimó posible crear jurisprudencia ni modificar la existente.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea recordó que el proyecto del señor Ministro Cossío Díaz no se aprobó al estimarse que una consulta a trámite no podría dar lugar a conclusiones y determinaciones como las que se presentaron en ese momento, por lo que se propuso variar la vía a través de un nuevo proyecto en el que se precisó que debía analizarse el fondo de esas cuestiones.

Estimó que el análisis respectivo no es meramente administrativo pues existen temas como cuál va a ser la obligatoriedad o no de las sentencias que condenan al Estado Mexicano, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la convencionalidad o no en cuanto al control de los tratados que exceden lo administrativo. Compartió la propuesta del señor Ministro Ortiz Mayagoitia en el sentido de que no se considera que por el hecho de aprobar la temática se apruebe el sentido o la posibilidad jurídica de que se analice

a través de esta vía, precisando que por determinación de este Tribunal se decidió que se analizara todo lo que contiene el proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que se debía entrar al estudio del asunto para posteriormente, abordar los temas que se han presentado a lo largo de la sesión. Manifestó que en principio, consideraba que se estaba ante una cuestión jurisdiccional; sin embargo, en su momento se analizarían los argumentos respectivos, por lo que estimó conveniente continuar con la propuesta del señor Ministro Ortiz Mayagoitia en el sentido de encorchetar los tres primeros temas.

El señor Ministro Aguirre Anguiano cuestionó dónde están las partes en el presente asunto para considerar que sea de naturaleza jurisdiccional.

La señora Ministra ponente Luna Ramos recordó que las consideraciones que sustentan su propuesta obedecen a las sostenidas en las sesiones que se abordó el asunto en primera ocasión, aun cuando de las discusiones sí surgieron cuestiones relacionadas con la obligatoriedad de la sentencia respectiva en virtud de las reservas realizadas a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como a la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, señalando que fueron parte de la discusión y de allí deriva el análisis.

En cuanto a las tesis, estimó que si bien no era necesario redactarlas, lo cierto es que se elaboraron para recoger el criterio de las discusiones anteriores, sin menoscabo de que en el engrose se supriman y se realicen las adecuaciones necesarias, agregando que en algunas partes del proyecto se apartará de las consideraciones que reflejan el sentir mayoritario. Señaló que no se está abandonando ninguna jurisprudencia sino que únicamente se recogen los criterios sostenidos al resolver la controversia constitucional 33/2002 promovida por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en contra del Decreto que aprueba la Convención Sobre Desaparición Forzada de Personas respecto de la reserva al artículo 9º, como parte de los argumentos para desestimar que la reserva relativa es inválida, para lo cual se realizan diversas consideraciones y se cita el precedente de este Pleno, por lo que no hay abandono de esos criterios, siendo una propuesta que surge de la postura mayoritaria expresada por los señores Ministros en las cuatro sesiones en que se analizó la consulta a trámite 489/2010.

El señor Ministro Presidente Silva Meza indicó que existieron votaciones diferenciadas respecto del tema y de los puntos resolutivos que dieron lugar al retorno y recordó los puntos decisorios aprobados en la sesión celebrada por el Tribunal Pleno el pasado siete de septiembre de dos mil diez, lo cual es acorde a lo que ahora se aborda en el

proyecto, sin menoscabo de que pueda quedar pendiente el considerando cuarto en comentario, lo que propuso al Tribunal Pleno y se aprobó por unanimidad de once votos.

La señora Ministra ponente Luna Ramos precisó el contenido de la propuesta reflejado en el considerando quinto “Análisis de la configuración de alguna de las salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (páginas de la sesenta y tres a la setenta y siete), en el que se estima que de la lectura del texto de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la aceptación del Estado Mexicano a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fue realizada en términos lisos y llanos, sino que tuvo dos salvedades.

En el proyecto se considera que para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera de las salvedades que formuló el Estado Mexicano (expulsión de extranjeros) en torno al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no constituye en la especie un tema que genere controversia, porque el asunto no versó sobre alguna orden dirigida a un extranjero para hacerlo abandonar del territorio nacional, precisando que el texto del artículo 33 de la Constitución Federal reformado mediante decreto publicado en el Diario

Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, goza de una *vacatio legis* que por el momento impide adoptar su contenido, pero que ya ha incorporado a los extranjeros en el goce de la garantía de audiencia, previamente a la orden de su expulsión.

En cuanto a la segunda salvedad hecha por el Estado Mexicano en la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exceptuó la aplicación retroactiva de su contenido, lo resuelto por dicha Corte tampoco configura un novedoso criterio interpretativo en el derecho interno, porque si bien dicho tribunal, en ejercicio de su potestad exclusiva para determinar en cada caso su propia competencia, desestimó las excepciones que la objetaron por la época en la que ocurrieron los hechos, adoptó incluso como soporte de su argumentación un fragmento de la jurisprudencia 49/2004 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que este Alto Tribunal reitera el anterior criterio por la coincidencia plena con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que sea necesario formular alguna consideración adicional pues este aspecto la sentencia que se examina nada aporta a la protección de los derechos humanos que el orden jurídico interno que no se hubiera reconocido con anterioridad.

El señor Ministro Aguirre Anguiano precisó que los pactos no son adhesiones incondicionales unilaterales sino

que se forman por dos partes y deben cumplirse de buena fe, por lo que tratándose de las resoluciones de un tribunal, el Estado que resulte vencido debe cumplir lo ordenado por el Tribunal Internacional de buena fe, siempre y cuando el Tribunal cumpla con su parte en el pacto, lo que implica someterse a su propio Estatuto, por lo que la resolución de aquél está sujeta a dicho Estatuto, siendo lo primero que debe estudiarse. Incluso, es importante analizar si el tribunal respectivo puede dejar de lado las reservas o el principio de reciprocidad.

Recordó que el proyecto sostiene que sin cuestionamientos la Suprema Corte debe someterse a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la invalidez de las reservas realizadas por México a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y propone una tesis para que en lo sucesivo no pueda ser invocada como excepción en los litigios en que el Estado Mexicano sea parte, considerando circular el argumento empleado en este asunto al ir en contra de la soberanía del concepto de reciprocidad sin atender a las reservas formuladas.

Agregó que la sentencia internacional materia de análisis se sustenta en los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en los diversos 30, 32, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

considerando que de ninguno de ellos se advierte que la Corte Interamericana tenga atribuciones para invalidar una reserva formulada por alguno de los Estados adheridos, lo que se corrobora con lo señalado en la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados.

Por tanto, consideró que el organismo jurisdiccional competente para invalidar la reserva del Estado Mexicano a la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, era la Corte Internacional de Justicia y no la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mencionó que la reciprocidad es un principio fundamental de las relaciones internacionales que supone un intercambio de prestaciones de la misma naturaleza entre los Estados, cuya importancia surge desde la negociación, pues la reciprocidad es necesaria para que se respete el principio de igualdad soberana de los Estados y reflejen las obligaciones asumidas en los acuerdos, en su terminación, su posible suspensión y en la formulación de reservas, pudiéndose afectar mediante la formulación de aquéllas que alteren el equilibrio entre derechos y obligaciones para un Estado respecto a otro, para lo cual existe el Tribunal Internacional correspondiente con sede en La Haya.

Precisó que la reciprocidad se encuentra en el caso de la objeción, la que una vez realizada, implica que la

disposición afectada no se aplicará en las relaciones entre el Estado reservante y el objetante.

Señaló que en el caso de los tratados sobre derechos humanos, incluyen obligaciones impuestas a los Estados, independientes del principio de reciprocidad, pues su naturaleza crea obligaciones frente a los Estados parte en dichos tratados y frente a los particulares principalmente; es decir, que los Estados están obligados frente a dos sujetos distintos, lo que se refleja en el artículo 60.5 de la Convención de Viena, al excluirlos del principio de reciprocidad en beneficio de la protección de la persona humana, para lo que dio lectura al referido precepto.

Por ende, señaló que en el presente caso debe recordarse que en la carta de la obligación de la Organización de Estados Americanos éstos reafirman el principio del orden internacional esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que en las sesiones anteriores no se pronunció sobre los criterios respectivos.

El señor Ministro Aguilar Morales cuestionó si debía tomarse en cuenta lo dispuesto en la resolución de seguimiento de cumplimiento emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalada en sus párrafos 16, 30 y 32 y sintetiza en el resolutivo 2, inciso c), limitando en el punto de cumplimiento lo siguiente: “Implementar en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, en relación con los límites de la jurisdicción penal militar; así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas (punto resolutivo décimo segundo y considerando treinta y dos)”, ya que según la propia Corte es lo único que se encuentra pendiente de cumplimiento por el Poder Judicial del Estado Mexicano.

El señor Ministro Cossío Díaz estimó relevante lo señalado por el señor Ministro Aguilar Morales siendo conveniente analizarlo en la parte final, indicando compartir la propuesta del proyecto.

Recordó que al resolver la controversia constitucional 33/2002 la Suprema Corte definió el estatus de la respectiva reserva, considerando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es la que desconoce el estatus de la reserva, sino que la propia Suprema Corte de Justicia de la

Nación la determina, recordando, en lo conducente, las tesis de rubro “DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APAREZCA LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO” y “DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA RESERVA EXPRESA FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO AL ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE BELÉM, BRASIL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE MAYO DE 2002, NO CAUSA AFECTACIÓN ALGUNA AL DISTRITO FEDERAL”, considerando que sí existe pronunciamiento expreso de este Alto Tribunal en el sentido de que la reserva puede ser removida.

Asimismo, recordó la doctrina de la Corte al respecto, considerando que se acerca al delito de desaparición forzada de personas de igual manera que lo hace nuestra legislación.

Manifestó que en este asunto se está resolviendo la reserva en términos de una situación continuada conforme a la doctrina como se desprende del párrafo 186 y de las notas 137 y 138 sobre la aplicación reiterada de la doctrina de la Corte Interamericana para efectos de describir un delito, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó las condiciones de aplicación de la reserva en términos de una situación continuada, manifestando interrogantes respecto de lo sostenido por el señor Ministro Aguirre Anguiano en el

sentido de si esta obligación de reciprocidad opera entre un Estado nacional y una Corte a la cual se somete por vía jurisdiccional, estimando que el principio de reciprocidad internacional tiene plena aplicación cuando se trata de relaciones entre Estados que están en una condición de igualdad, pero en subordinación a un órgano de carácter jurisdiccional que analiza y revisa las conductas del Estado mexicano a través de sus funcionarios, considerando difícil aceptar la doctrina de la reciprocidad, en lo que se refiere a un Estado nacional respecto de un Tribunal que está para juzgarlo por determinación expresa de este órgano.

Señaló comprender la aplicación de esta doctrina entre Estados que están en plano de igualdad y entre Estados que participan, como lo mencionaba el señor Ministro Aguirre Anguiano bajo la condición de *pacta sunt servanda* como elemento fundacional del derecho internacional, pero no para predicar esta característica del Estado nacional respecto de la Corte Internacional, porque en ejercicio de esa soberanía es como decidió someter determinado tipo de asuntos de su vida interna a un órgano internacional, por lo que se manifestó a favor del proyecto.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia manifestó interrogantes sobre la afirmación relativa a que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación deba reconocer sin condiciones la obligatoriedad de la sentencia comentada, así como respecto de la primera tesis propuesta, en el sentido

de cuestionarse si es posible emitir una tesis jurisprudencial fuera de los procedimientos de resolución de conflictos.

Estimó que en dicho aspecto formal se debe ser cuidadoso pues la jurisprudencia que se está autorizando a emitir no puede referirse a una sentencia sino a las reglas generales indicadas en el artículo 94 constitucional, por lo que no se está en un caso de ejercicio jurisdiccional sino solamente de manera administrativa señalar cuál es la respuesta de la Suprema Corte al resolutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento de una de sus sentencias en la que se vincula directamente al Poder Judicial de la Federación.

En cuanto al fondo, estimó que la tesis propuesta no emana de la solución de un conflicto de criterios sino de una determinación del Tribunal Pleno que interpreta para sí mismo el artículo 1º de la Constitución, recordando el criterio sostenido al resolver el amparo en revisión 120/2001 y las tesis que se elaboraron de rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL” y “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”, de donde se desprende que en la cúspide del sistema jurídico mexicano

está la Constitución y, con ella, su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional.

Señaló que los tratados y su interpretación están por debajo de la Constitución, lo que no implica un desacato a la sentencia, recordando que la única vinculante para la actividad sustantiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la propia Constitución, por lo que se manifestará en contra respecto de esta parte del proyecto, pues el mandato del Tribunal Pleno en el documento anterior consistió en hacer una declaración en la que se incluyan las consideraciones necesarias y convenientes de cómo este Alto Tribunal atiende y cumple con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por lo que estimó conveniente centrarse en que la propia Corte en un documento oficial puntualizó qué es lo que le falta hacer al Poder Judicial de la Federación, para lo que manifestó que preparó una propuesta de declaración que no sería compartida por todos los señores Ministros.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó que este Pleno al resolver la consulta 489/2010 determinó que el tema relativo a si la sentencia respectiva era vinculatoria para este Alto Tribunal se había definido por mayoría de votos. Partiendo de esa base, manifestó interrogantes sobre la propuesta del proyecto, pues si ya existe una decisión mayoritaria en el sentido de que se deban acatar las

obligaciones que derivan de la sentencia para este Alto Tribunal no será necesario hacer un análisis exhaustivo respecto de las salvedades o reservas.

Además, insistió en lo señalado por los señores Ministros Aguilar Morales y Ortiz Mayagoitia en el sentido de que se debe delimitar el campo respecto del cual se debía dar cumplimiento a la sentencia de mérito que indica qué medidas debe tomar el Poder Judicial de la Federación en cumplimiento a la referida sentencia.

Consideró que el cumplimiento no debe reducirse a los puntos resolutivos de la sentencia, sino que debe desprenderse también de las consideraciones de la misma, sin que, en el caso, exista obligación alguna de este Alto Tribunal respecto de la declaratoria del análisis de la Corte Interamericana de la invalidez de la reserva mencionada, recordando que los criterios de la referida Corte Internacional deben ser orientadores en las decisiones futuras sobre violaciones a derechos humanos conforme a lo previsto en la reforma constitucional, por lo que consideró que el proyecto excede la consulta elaborada inicialmente ante el Tribunal Pleno.

Por ende, propuso votar sobre la necesidad de hacer el pronunciamiento previo que se elaboró o si este Alto Tribunal puede circunscribirse a lo establecido por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos que falta por cumplir respecto de la resolución.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró que no es posible establecer jurisprudencia en este caso, pues se trata de un asunto que no es jurisdiccional, sin que se pueda aprobar un criterio derivado de un asunto de esa naturaleza.

Señaló que en el párrafo 312 se indica expresamente que se invalida la reserva del Estado Mexicano en el sentido de que no le satisface el primer requisito establecido en el artículo 19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; por lo que en consecuencia, debe ser considerada inválida, sosteniéndose que el Estado Mexicano *motu proprio*, ha iniciado el procedimiento interno correspondiente para el eventual retiro de la reserva; la que sigue existiendo, lo que es discutible.

Recordó la importancia de cumplir con los compromisos internacionales para lograr el respeto y vigencia efectiva de los derechos fundamentales del ser humano, sin que sea posible sostener que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sean obligatorias o que México no deba acatarlas, lo que deberá hacerse en el marco del tratado al que se comprometió nuestro país, manifestándose en desacuerdo respecto de los alcances que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorga a su sentencia, pues los consideró excesivos.

Precisó que en todo pacto existen dos partes obligadas, por lo que ambas deben cumplir con sus compromisos en los términos en que se comprometió, conforme a los principios y límites competenciales que la propia Convención le señala, por lo que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no actúa dentro de sus límites, el Estado Mexicano no puede aceptar sus determinaciones porque están fuera de las atribuciones de aquélla y, por ende, son contrarias a la propia Convención que las sustenta.

Recordó el contenido del artículo 63 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, precisando que prevé varios supuestos: primero, que decida la existencia de una violación de un derecho o libertad protegido por la Convención; segundo, que por ello se garantice al lesionado, el goce del derecho o libertad conculcado; tercero, que en su caso se reparen las consecuencias y no las causas de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos; y, cuarto, que se pague una justa indemnización a la parte lesionada, de lo que puede deducirse que conforme a la propia Convención, las sentencias que dicte la Corte Interamericana deben limitarse al sujeto lesionado y, por tanto, la individualización de los alcances de la Corte Interamericana se comprenden considerando que los casos sólo son llevados a su conocimiento por situaciones determinadas y concretas y no

por condiciones generales acontecidas en abstracto, como son las políticas públicas de un Estado.

Por esta razón, el sistema contenido en los artículos 46, 47, 48, 49, 50 y 61 de la Convención señalada exige que se trate de un caso concreto en el que se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional reconocidos, lo que sólo es posible ante la existencia de casos específicos y de sujetos determinados, sin implicar que el fallo no deba ser acatado; sin embargo, respecto del Poder Judicial de la Federación sólo será en aquello que está dentro de los límites competenciales y resolutores fijados por los parámetros normativos de la propia Convención obligatorios también para la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se manifestó en desacuerdo con el proyecto en el sentido de que este Alto Tribunal deba reconocer, sin condiciones, la obligatoriedad de la sentencia de que se trata e incluso, se deba constreñir a incorporar dentro de sus criterios interpretativos las consideraciones esenciales de fondo extraíbles de esta resolución para casos futuros.

Precisó que el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Federal prevé que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con aquélla y con los tratados internacionales favoreciendo a la protección de las personas; sin que de este precepto se desprenda que por mayoría de razón, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación esté constreñida a adoptar lo determinado en dicho fallo en los criterios que establezca en casos futuros.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos el diecinueve de mayo de dos mil once señaló como único punto pendiente de cumplir relacionado con el Poder Judicial de la Federación, el relativo a la capacitación de jueces sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos, de programas o cursos permanentes sobre los límites de justicia militar, los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, lo que correspondería al Consejo de la Judicatura Federal.

En relación con las otras propuestas que el proyecto estima que deben acatarse, consideró que se refieren a la política nacional del Estado, por lo que no pueden ser materia de una sentencia referida a un sujeto en particular, al ir más allá de la reparación individual a que se refiere la propia Convención, por lo que deberían, en su caso, ser recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia los Estados en un sentido amplio y general.

Además, consideró que no puede ser motivo de cumplimiento, la parte de la sentencia encaminada a adoptar ineludiblemente medidas legislativas y generales, como la impartición de cursos o someter a este Máximo Tribunal de

la República la interpretación y forma de aplicar las leyes y la Constitución General, pues excede al compromiso aceptado por nuestro país, con lo que se violentaría el compromiso adquirido.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas estimó que este Alto Tribunal no puede analizar la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por inobservar una reserva, ya que podría provocarse un conflicto entre ambas Cortes o se podría vaciar de jurisdicción a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sostuvo que debía considerarse como jurisprudencia la relativa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos pues un sistema de precedentes atiende a la materia y no a los sujetos de la controversia.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que el proyecto que propone se elaboró conforme a la discusión que se formuló sobre la consulta la primera vez que se presentó ante el Tribunal Pleno, señalando que se aparta de la tesis presentada en el considerando quinto, la que únicamente incorpora los razonamientos sostenidos en aquellas sesiones.

Recordó que se conjuntó todo lo que motivó la discusión de cuatro sesiones, razón por la cual se elaboró el proyecto

Sesión Pública Núm. 74

Lunes 4 de julio de 2011

con el fin de que se analice punto por punto y, con base en ello, se pueda determinar qué consideraciones se mantendrán en el engrose y cuáles se eliminarán conforme al criterio de la mayoría.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto y los demás continuarían en lista, convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el martes cinco de julio del año en curso, a partir de las once horas y levantó esta sesión a las trece horas con veinte minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.